

**Acta 16**

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los Estados Unidos Mexicanos, a las trece horas con dos minutos del viernes catorce de julio del año dos mil veintitrés, se reunieron para llevar a cabo la **sesión extraordinaria** de este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, las siguientes ciudadanas y ciudadanos:

Brenda Canchola Elizarraraz	consejera presidenta
Beatriz Tovar Guerrero	consejera electoral
María Concepción Esther Aboites Sámano	consejera electoral
Nora Maricela García Huitrón	consejera electoral
Sandra Liliana Prieto de León	consejera electoral
Antonio Ortiz Hernández	consejero electoral
Luis Gabriel Mota	consejero electoral
Indira Rodríguez Ramírez	secretaria ejecutiva
Mariana Pérez Escalón	representante suplente del PAN
Edgar Castro Cerrillo	representante propietario del PRI
José Manuel Delgado Reyes	representante suplente del PT
Juan Miguel Reyes Villegas	representante suplente de morena

En desahogo del **punto uno** del orden del día, relativo a la lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal, la secretaria ejecutiva comunica que existe cuórum legal para celebrar la sesión.

En desahogo del **punto dos** del orden del día, relativo a la lectura y aprobación, en su caso; del orden del día, la secretaria ejecutiva procede a la lectura de este y refiere que contiene los siguientes puntos:

1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal;
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día;
3. Informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida;
4. Presentación y aprobación, en su caso, de los siguientes proyectos de resolución:
  - 4.1 Procedimiento sancionador ordinario 07/2021-PSO-CG;
  - 4.2 Procedimiento sancionador ordinario 08/2021-PSO-CG;
  - 4.3 Procedimiento sancionador ordinario 10/2021-PSO-CG;
5. Clausura de la sesión.



Acto seguido la consejera presidenta pone a consideración de todas y todos el orden del día. Al no solicitarse intervenciones se somete a votación el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

En desahogo del **punto tres** del orden del día, relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, la secretaria ejecutiva da cuenta de esta:

**Primera.** Con el oficio INE/DEOE/0738/2023 signado por Miguel Ángel Patiño Arroyo, director ejecutivo de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, recibido el doce de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, relacionada con el acuerdo INE/CG292/2023, por el que se aprueban los modelos y la producción de los materiales electorales y de líquido indeleble que se utilizaran en el proceso electoral federal 2023-2024, así como las modificaciones al Reglamento de Elecciones y sus anexos 4.1 y 4.2, en lo concerniente con el marcador de boletas, materiales electorales para votación de la ciudadanía residente en el extranjero, cancel electoral y caja paquete electoral.

El Consejo General por conducto de su presidenta acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere e incorporar el oficio y su anexo al expediente respectivo toda vez que el doce de julio de dos mil veintitrés se hicieron del conocimiento de las y los integrantes de este Consejo General mediante correo electrónico.

**Segunda.** Con el oficio CCVPEM/020/2022 signado por Dulce María de Fátima Lara Morales, secretaria técnica de la Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido el trece de julio del dos mil veintitrés, mediante el cual se remite el informe de las acciones realizadas por los partidos políticos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género durante el ejercicio dos mil veintidós, presentado en la sesión ordinaria celebrada el diez de julio del año en curso, por la Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres.

El Consejo General por conducto de su presidenta acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere e incorporar el oficio y su anexo al expediente respectivo, toda vez que el trece de julio de dos mil veintitrés se hicieron del conocimiento de las y los integrantes de este Consejo General mediante correo electrónico.

**Tercera.** Con el oficio SE/558/2023 signado por Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido el catorce de julio del dos mil veintitrés, mediante el cual se comunica que en cumplimiento a lo dispuesto en el considerando 8 del acuerdo CGIEEG/025/2023 emitido por el Consejo General del IEEG en sesión ordinaria del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, remite el informe de avance correspondiente a las gestiones realizadas respecto de los reintegros de remanentes de las otroras candidaturas independientes



El Consejo General por conducto de su presidenta acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere, e incorporar el oficio y su anexo al expediente respectivo, toda vez que el catorce de julio de dos mil veintitrés se hicieron del conocimiento de las y los integrantes de este Consejo General mediante correo electrónico.

En desahogo del **punto cuatro** del orden del día relativo a la presentación y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución:

4.1 procedimiento sancionador ordinario 07/2021-PSO-CG.

4.2 procedimiento sancionador ordinario 08/2021-PSO-CG.

4.3 procedimiento sancionador ordinario 10/2021-PSO-CG.

Debido a que fueron remitidos con la convocatoria, la secretaria ejecutiva solicita que se le exima de su lectura.

En seguimiento a la petición de la secretaria, se somete a votación su solicitud, misma que es aprobada por unanimidad de votos.

En uso de la voz, la consejera presidenta señala que antes de poner a consideración estos proyectos de resolución dará una breve explicación de lo que tratan para que las personas que los siguen a través de las redes sociales conozcan el punto que estamos abordando.

Expresa que se someten a consideración tres proyectos de resolución de los procedimientos sancionadores ordinarios identificados con las claves: 07/2021-PSO-CG; 08/2021-PSO-CG y 10/2021-PSO-CG, dichos procedimientos derivan de la vista realizada por este Consejo General a través del acuerdo CGIEEG/309/2021 aprobado en sesión ordinaria del veintitrés de julio de dos mil veintiuno con motivo de la omisión de presentar el formato denominado tres de tres contra la violencia para el registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, por parte de los partidos políticos Movimiento Ciudadano, morena y el otrora partido político Fuerza por México respectivamente, así como por personas que fueron otroras personas candidatas en estos procedimientos.

Estos proyectos se presentan en cumplimiento a lo ordenado en la sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto celebrada el nueve de diciembre de dos mil veintidós, en la cual se rechazaron las anteriores resoluciones propuestas por la Comisión de Denuncias y Quejas y se devolvieron a la Unidad Técnica Jurídica de lo Contencioso Electoral, a efecto que se elaboraran nuevos proyectos en los que se declarará la inexistencia de infracción de las partes denunciadas.

Lo anterior tomando en cuenta los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría de las personas integrantes de este órgano colegiado, quedando intocado el sobreseimiento respecto del otrora partido político Fuerza por México, al haber perdido su registro como partido político.



Dicho lo anterior la inexistencia de la infracción respecto de la omisión de presentar el formato denominado tres de tres contra la violencia, se sustenta con los motivos que se exponen a continuación: primero la vista sobre los hechos se realizó en un momento distinto al previsto legalmente, se sostiene que la vista dada por el Consejo General mediante el acuerdo CGIEEG/309/2021 no fue realizada en alguno de los dos momentos posibles.

Esto es, al momento en que concluyó el registro de las candidaturas y el plazo de los requerimientos que correspondieran o bien una vez realizadas las sustituciones correspondientes.

Por lo tanto, tomando en cuenta que el acuerdo CGIEEG/309/2021 fue emitido en momento posterior a los ya citados se sostiene que no pueden derivarse obligaciones para las partes denunciadas cuya certeza y seguridad jurídica debe protegerse así, pues dicho acuerdo, así como el informe final correspondiente a la presentación del formato tres de tres contra la violencia correspondiente carecen de eficacia probatoria y resultan insuficientes para acreditar los hechos imputados.

Segundo motivo, actas de oficialía electoral identificadas con las claves actas OEIEEGSE/41, OEIEEGSE/31 y OEIEEGSE/29 de dos mil veintidós, carecen de eficacia probatoria, ahora bien, por lo que respecta a las actas de oficialía electoral que tuvieron como propósito certificar los expedientes físicos y digitales de las personas denunciadas debe considerarse que transcurrieron alrededor de catorce y quince meses entre la aprobación de los registros respectivos y el levantamiento de las actas de oficialía electoral correspondientes.

Por lo que con el levantamiento de estas no se atiende a los principios rectores de la oficialía electoral establecidos en el artículo cinco del *Reglamento de Oficialía Electoral de este Instituto* puesto que las actas no se realizaron en el momento idóneo y oportuno, lo que demerita su autenticidad de lo que se plasmó en dichos documentos.

Tercero, se atiende al principio de definitividad, ahora bien, en los acuerdos de registro de candidaturas CGIEEG/103/2021; CGIEEG/108/2021; CGIEEG/124/2021 y CGIEEG/152/2021, se hizo constar la presentación de los formatos tres de tres contra la violencia que nos ocupan, no obstante, aún en el caso que no se hubieran presentado dichos formatos a la fecha, resulta material y jurídicamente imposible reponer los referidos acuerdos de aprobación de registro pues atendiendo al principio de definitividad ya no podría proveerse lo necesario para dejarlos insubsistentes.

En virtud de lo anterior y al no haberse acreditado la conducta señalada al inicio de mi intervención, se propone en el expediente 07/2021-PSO-CG declarar la inexistencia de la infracción respecto al partido político Movimiento Ciudadano, así como a las ciudadanas que en el procedimiento se refieren que fueron otroras candidatas a regidoras suplentes cinco de Celaya y sindica propietaria de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional respectivamente en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.



En el expediente 08/2021-PSO-CG se propone declarar la inexistencia de la infracción respecto al partido político morena, así como al otrora candidato a regidor propietario cuatro de Villagrán en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

En el expediente 10/2021-PSO-CG, se propone sobreseer el procedimiento por lo que respecta al otrora partido político Fuerza por México en virtud de que dicho partido ha dejado de existir por haber perdido su registro y determinar la inexistencia de la infracción del ciudadano, otrora candidato a síndico suplente en el municipio de Romita en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

De eso se tratan los proyectos de resolución de los procedimientos sancionadores ordinarios que están a nuestra consideración, por lo que quiero preguntar a las y los integrantes de este Consejo General si desean reservar alguno de los proyectos de resolución para su análisis o discusión particular.

En uso de la voz la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León señala ser su deseo reservar para su discusión en lo individual, cada uno de estos procedimientos derivado que, quiere hacer comentarios respecto de cada una de las resoluciones.

La consejera presidenta en uso de la voz indica que se iniciara con el procedimiento sancionador ordinario 07/2021-PSO-CG para lo cual tiene el uso de la voz la consejera Sandra.

En uso de la voz la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León expresa que quiero señalar en principio, que la de la voz no comparto el sentido de este proyecto de resolución del expediente 07/2021-PSO-CG y las razones por las cuales no comparto el sentido, obran también en el acta de la sesión de este Consejo General de fecha nueve de diciembre del año dos mil veintidós y me voy a explicar.

Como es de su conocimiento, los hechos constitutivos de la presunta conducta infractora ocurrieron justamente durante el período del registro de candidaturas del proceso electoral 2020-2021, en ese sentido y derivado de que en particular el instituto político Movimiento Ciudadano, así como las ciudadanas Norma Areli Murillo Ledesma y Ma. Guadalupe Pérez Méndez, no cumplieron con una obligación que este Consejo General acordó en la expedición de los *Lineamientos para el Registro de Candidaturas* y los lineamientos particularmente que incorporan la ley tres de tres contra la violencia política a las mujeres por razones de género.

Por lo que en aquel momento se determina que era obligación del otrora presidente del Consejo General de este Instituto comunicar en dos distintos momentos la falta de exhibición de estos documentos, de igual forma también es importante señalar que en el caso de que se trata esta falta de exhibición no tenía como consecuencia directa, la cancelación del registro de las candidaturas a estas personas o a estos partidos políticos.



En ese sentido, determinamos en aquel momento quienes integrábamos el Consejo General, que no somos las mismas personas que lo integramos ahorita, que, ante la falta de exhibición de este documento concreto, la consecuencia sería únicamente dar vista a la Unidad Jurídica para que iniciaran los procedimientos correspondientes, por el incumplimiento de un acuerdo del Consejo General que era la exhibición de este documento, eso no significaba que se fuera a cancelar candidatura alguna a algún instituto político o persona concreta.

Por lo anterior, una vez que concluyeron estos plazos, el presidente de este Instituto Electoral en aquel momento, remite a la Unidad Jurídica y de lo Contencioso Electoral estas vistas instruidas por parte del Consejo General y la consecuencia es que la Unidad Jurídica instruya durante varios meses este procedimiento, posteriormente ya en el mes de julio del año dos mil veintidós la Unidad Jurídica remite el proyecto de resolución a la Comisión de Quejas y Denuncias quien aprueba por mayoría de votos los proyectos de resolución en el sentido de sancionar.

En principio de que se acreditaban los hechos, la segunda fue que se acreditaba la responsabilidad del instituto político y de las personas señaladas y de igual manera en el caso de que se trata, se estableció una sanción, esa sanción fue una amonestación pública, les decía que una vez que se remiten también por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias estos expedientes al Consejo General, quien los discuten en la sesión del pasado mes de diciembre del año dos mil veintidós.

Señalando que es aquí en donde quiero iniciar con mi primera observación, en relación con los proyectos, este proyecto de resolución en concreto que se pone a nuestra consideración y es que llama poderosamente mi atención que curiosamente siempre que se trata de temas en los que están inmiscuidos los derechos políticos-electorales de mujeres, en este caso concretamente la obligación de la exhibición de este documento.

No hay un auténtico ejercicio de autocrítica por parte de este Instituto Electoral, de quienes integramos el Consejo General y de la propia Unidad Técnica Jurídica y de lo Contención Electoral de este Instituto, en resolver con diligencia y prontitud todos estos asuntos, y llamo la atención en el asunto de que se trata porque prácticamente han transcurrido siete meses desde aquel momento.

Llama en ese sentido mi atención, quiero hacer énfasis en ello, y haría la atenta solicitud a que pudiéramos ser como Consejo General, más diligentes en la resolución de estos asuntos, porque considero que el tema de la impartición de justicia es de lo más relevante.

Ahora bien, voy a hacer también observaciones en cuanto al fondo del asunto de qué se trata, yo difiero de lo que se sostiene en este proyecto de resolución en cuanto a que, en principio y en virtud de que la vista que realizó o las vistas que realizó el otrora presidente del Consejo General de este Instituto se llevaron a cabo con posterioridad de las fechas señaladas en el propio acuerdo, eso en si ya genera la



consecuencia de que ante una falta de comunicación digamos oportuna entonces la irregularidad cometida por el instituto político y estas personas ya no están.

Es decir, se utiliza como un argumento para señalar que no acarrea ninguna consecuencia jurídica, suponiendo sin conceder que no comparto ese argumento por supuesto, entonces lo correcto hubiera sido que se diera vista al Órgano Interno de Control de este Instituto porque un servidor público de esta institución no hizo la vista en el momento oportuno.

Quiero precisar, que no estoy señalando que se remita este expediente, o que se remita alguna vista concreta al Órgano Interno de Control y no lo precisó y no lo señaló en esos términos, porque desde mi punto de vista el hecho de que el otrora presidente de este Consejo General hubiera realizado la vista con posterioridad, ninguna consecuencia jurídica negativa para él acarrea en principio, a mi juicio, y yo no seré quien resuelva, en el caso de que alguien determinara que es así.

En segundo término, también desde mi punto de vista, el hecho de que se haya hecho esta comunicación en días posteriores no genera la invalidación o la convalidación, si lo quieren ver, desde esa perspectiva de que se hubiera exhibido en ese momento, esta vista.

En ese sentido, no trae una consecuencia jurídica aparejada como la que se pretende sostener en el proyecto de resolución y eso lo sostuve incluso también en la sesión del pasado nueve de diciembre.

Por otro lado, quiero señalar que desde mi punto de vista las documentales consistentes en el acuerdo mediante el cual este Consejo General otorgó el registro de esa candidatura, de estas personas a este instituto político, no carece de eficacia probatoria en los términos en los que se señala y de igual forma tampoco el acta que elaboró para tal efecto el titular de la oficialía electoral tiene o carece de esta eficacia probatoria que pretende dársele.

Quiero nada más llamar a que en el expediente no habrá constancia alguna de que se hubiera objetado por parte de las personas denunciadas, así como del propio partido político denunciado alguno de estos documentos, en consecuencia, aunque estén estas dos probanzas únicamente en el expediente no genera una consecuencia jurídica como la que pretende darse de que carece eficacia probatoria.

Y quiero también precisar datos concretos, nada más para insistir y hacer énfasis en ello, el acuerdo a través del cual el Consejo General otorga el registro a estas candidaturas a este partido político no trae aparejada la consecuencia de que se les hubiera tenido que requerir, en todo caso este documento concreto al que se hace referencia porque no se les podía o no era la consecuencia jurídica negárseles el registro de esta candidatura.

Y de igual manera puedo nada más también señalar que hablare en la segunda ronda de uso de la voz, pero quiero hacer una precisión en



relación con la eficacia probatoria particularmente del acta emitida por el titular de la oficialía electoral, aquí se señala que la valoración que se hace de este documento ya en cuanto al valor que para este Consejo General pretenderá darle si es que se vota a favor, dice que no se realizó en el momento idóneo, oportuno lo que demerita su autenticidad de lo que se plasmó en dicho documento y luego se señalan tres supuestos distintos por los cuales este Consejo General no podría darle ese valor probatorio, ya sea porque las partes interesadas puedan solicitar la devolución de la documentación, ya sea que este se solicite a este Instituto la documentación original o copia certificada de los expedientes de registro de candidaturas o bien las candidatas o candidatos y los partidos políticos a través de su representantes acreditados ante el Consejo General pueden tener acceso a la documentación que integran los expedientes de registro.

Se señalan de manera genérica estas hipótesis por las cuales a juicio de quien proyecta este asunto no se le puede dar ese valor probatorio porque pudiera ser que eso ocurrió, no obran constancias en el expediente de que eso hubiera ocurrido, tampoco se cuestiona en ningún momento en este proyecto de resolución la cadena de custodia que siguieron todos estos documentos y es aquí donde yo me pregunto, si estos documentos o cualquier otro obra en los archivos de la Secretaría Ejecutiva o de los archivos de este Instituto.

La consecuencia jurídica sería, que, por qué ha pasado algún tiempo no podríamos darle eficacia probatoria porque ya pasó mucho tiempo, y entonces no estamos seguros de lo que hay, ¿que no sabemos qué es lo que hay?, ¿que no sabemos cómo deberían de estar custodiados estos documentos?, me genera la inquietud en el caso de que se trata.

Estaré atenta a dar inicio a la segunda ronda de intervenciones para concluir con mis observaciones en relación con los proyectos de resolución de qué se trata.

En uso de la voz el consejero electoral Luis Gabriel Mota señala que respecto a estos tres procedimientos sancionadores que el día de hoy, en esta sesión extraordinaria, vamos a revisar y me permito manifestarle que yo votaré a favor de los tres proyectos, en congruencia con lo que establecí y lo que argumenté en la sesión del nueve de diciembre que ya mencionó la consejera Sandra.

En aquella ocasión referí, que no debería sancionarse a los partidos políticos, ni a las y los excandidatos denunciados, sino que se debería de declarar la inexistencia de la conducta ya que no existía certeza respecto a la entrega o no del formato tres de tres contra la violencia en el registro de las candidaturas del pasado proceso electoral local 2020-2021 y por tanto existía una duda razonable de la comisión de una conducta antijurídica.

Agradezco a la autoridad sustanciadora considerar los argumentos expresados desde esta consejería, para arribar a estas conclusiones vale la reflexión y creo que coincido con la consejera Sandra que la demora de más de siete meses en regresar a este Consejo General los



proyectos de aquella sesión hubiese sido más eficiente atender los señalamientos de este Consejo General respecto a la inexistencia de la conducta por la vía de engrose, atendiendo los argumentos de la mayoría.

Sin duda debemos hacer efectivo el principio constitucional de expeditéz, que tenemos un problema estructural y debemos resolverlo para atender con eficiencia las quejas y denuncias que se presenten con motivo del próximo proceso electoral local ordinario y concurrente 2023-2024.

Y presidenta una petición, en los tres documentos se da el mismo caso en la parte, y tomo en cuenta el cuatro punto uno, vale la pena, donde estamos hablando del acta de la oficialía electoral, vale la pena poner la fecha del oficio en el que se le solicitó a la oficialía electoral realizara la diligencia por qué, cuando se argumenta en el primer párrafo de la página cuarenta y nueve, que lo citó incluso la consejera Sandra, que se argumenta que no se realizó en el momento idóneo y oportuno.

Para definir por qué no se realizó en el momento idóneo y oportuno habría que tener en cuenta la fecha en que se le pidió a la oficialía electoral realizar la diligencia, esos los tres documentos, en este caso es esta página, en los demás varía, pero es el mismo argumento y otro también que en los tres documentos yo pediría que incorporáramos en este mismo considerando cinco punto tres punto dos que en este caso es la página cincuenta, referente a los documentos con los que se dio vista y al acta de oficialía electoral carecen de eficacia probatoria.

Considero que hay que agregar una conclusión y creo que también lo mencionó la consejera Sandra, sobre el sentido que tendría, lo incierto que fue la cadena de custodia, es decir, que al no tener esta certidumbre pues no se garantiza la inviolabilidad y autenticidad de los respectivos expedientes de registro de las candidaturas, es decir, con una conclusión ya para cerrar la parte de la cadena de custodia sería cuanto.

En uso de la voz la consejera electoral Nora Maricela García Huitrón, manifiesta que únicamente para referir que yo también esto haré en contra de los proyectos, derivado de que como ya se manifestó previamente por la consejera de Sandra, en su momento, se hizo ya la petición de que se razonara de una manera diferente la sanción a la que se tenía que arribar, como manera de conclusión en esos procedimientos por no haber cumplido con el formato referido.

Señala que llama también mi atención, que pretenden justificar que no es posible sancionar a las personas a través de un hecho negativo cuando sabemos perfectamente, quienes conocemos del tema jurídico, que los hechos negativos no se pueden certificar, luego entonces al hablar de un hecho negativo estamos revirtiendo la prueba y hacemos aquí una construcción, un argumento, en el que si bien el acta de oficialía está diciendo cuál es el contenido del expediente y aquí llegamos a la conclusión de que no se está llegando, o sea, no tenemos el expediente completo por una serie de irregularidades que aquí nada



más decimos que es por el transcurso del tiempo, ya pierde certeza el procedimiento de guardia custodia del documento.

Por lo que me genera mucha falta de certeza en cuanto al sentido en el que se llega a la conclusión en estos procedimientos, razón por la cual me voy a separar del sentido tal como lo hice en diciembre y en congruencia a mi dicho de la vez pasada.

La presidenta del Consejo abre segunda ronda de intervenciones para quien guste hacer uso de la voz.

En uso de la voz la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León, continúa con la explicación del por qué considero que existe en este proyecto de resolución, una indebida valoración del material probatorio les decía entonces que únicamente se hace referencia en esta valoración a estas dos pruebas que existen en el expediente y sobre estas dos pruebas a las que se les resta eficacia probatoria en lo individual se arriba a la conclusión de qué se trata.

En consecuencia, yo me aparto del sentido en el que se pretende llevar a cabo el dictado de esta resolución y únicamente precisar que, si existe una valoración del material probatorio defectuosa, pues en consecuencia, se puede arribar a la conclusión que se establece en la página sesenta y siete del proyecto de resolución de qué se trata, que exista una duda razonable respecto a la presentación de los formatos de qué se trata, es decir, se parte a mi juicio, de premisas erróneas lo que hace que se arribe a una conclusión falsa.

Por tanto, me separo del sentido de la resolución de qué se trata y exhortar únicamente, justo por lo que aparece aquí consignado en el proyecto de resolución, a que tanto la oficialía electoral como la propia Unidad Técnica Jurídica de lo Contencioso Electoral y la propia Secretaría Ejecutiva, porque es la que se encarga del archivo de este Instituto, sean más diligentes en su actuación porque aquí con este proyecto de resolución, se deja constancia del trabajo ineficiente que estamos haciendo como Instituto al respecto gracias.

En uso de la voz la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero señala que el motivo de mi intervención es para anunciar que en congruencia con lo ocurrido en la pasada sesión de este Consejo General, el nueve de diciembre de dos mil veintidós, en mi carácter en su momento, de presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, presenté a este Consejo General estos proyectos de resolución en un sentido diverso al que hoy se están presentando, sin embargo, por mayoría de votos de este Consejo General no fueron aprobados y se devolvieron de manera directa a la Unidad Jurídica.

Manifiesta que de entrada quiero dar la explicación de que esa es la razón por la que estos proyectos de resolución, en un nuevo sentido, no están siendo presentados por la Comisión de Quejas y Denuncias, es importante aclararlo, se están presentando de manera directa a través de la presidencia de este Consejo General por la Unidad Técnica Jurídica, al haber cambiado el sentido de la resolución, del sentido en



el que originariamente la Comisión de Quejas y Denuncias a mi cargo había traído estos proyectos, estaría yo votándolos en contra y estaría también haciendo llegar un voto particular.

Solamente quisiera referirme al tiempo en la demora de la sustanciación de los procedimientos que se ha mencionado, creo que es importante hablar de la cadena completa en términos de plazos, es importante recordar que estos proyectos fueron radicados, los tres, el pasado treinta de julio de dos mil veintiuno, y del treinta de julio de dos mil veintiuno al nueve de diciembre de dos mil veintidós pasaron diecisiete meses.

Me toca asumir la presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias en octubre de dos mil veintidós y entonces en octubre empiezo a revisar el estatus de los asuntos pendientes y entre ellos se encontraban estos proyectos, estos procedimientos, entre otros, que traían diecisiete meses de atraso y creo que es importante también señalar que las presidencias de las comisiones tenemos la total responsabilidad de asumir la supervisión y la vigilancia de lo que se hace en las áreas técnicas y también sobre todo instar un tratamiento expedito, un tratamiento eficaz.

Por supuesto, no es nuestra responsabilidad la sustanciación de los asuntos, pero sí debemos asumir una corresponsabilidad en instar la diligencia y la atención de ellos y llama mi atención que ahora y en varias sesiones se ha dicho de la falta de expeditéz con el que la Unidad Jurídica, aclaro, me queda muy clara mi atribución y hasta dónde me alcanza como presidencia y que estos no los trae la comisión, estos proyectos no los trae la comisión, pero sí creo que vale la pena empezar a ver hacia el proceso electoral, empezar a concentrarnos en lo que debemos resolver hacia el proceso electoral, porque reitero, estos proyectos incluso derivan del proceso electoral pasado, derivan de actuaciones del proceso electoral 2020-2021, fueron radicados el treinta de julio de dos mil veintiuno y pasaron diecisiete meses para que la Comisión de Quejas y Denuncias pudiera traerlos al Consejo General.

Considera que todas y todos debemos hacernos cargo de la parte que nos corresponde, y por supuesto trabajar para una mayor expeditéz, eso sería cuanto en mi intervención.

En uso de la voz la consejera electoral María Concepción Esther Aboites Sámano quien manifiesta que también quiero hacer mención del tema de la celeridad que se comentó por quienes me antecedieron en el uso de la voz, concretamente por la consejera Sandra, como ya lo he mencionado en otras sesiones de este órgano el tema de la celeridad no es algo de hoy, esto es algo que se viene arrastrando desde el año 2020-2021 con la integración de la Comisión de Quejas y Denuncias.

Llama mi atención que el día de hoy, se habla de la falta de diligencia y responsabilidad por parte de la Secretaría Ejecutiva y la presidencia cuando desde mi punto de vista quien tenía la obligación de supervisar y de dar celeridad a estos asuntos para la impartición de justicia pronta y expedita que tanto se alude, debió ser desde la Comisión de Quejas



y Denuncias creo que debemos como ya lo comentó la consejera Beatriz hacernos responsables y asumir estas responsabilidades que nos corresponden como consejeras, como consejeros y como integrantes y presidentes de comisiones.

También quiero mencionar que, desde mi punto de vista, todo esto que se menciona se pudo advertir desde de dos mil veintiuno a dos mil veintidós, incluso antes de mayo del dos mil veintidós que se hizo la primera remisión a este Consejo General del expediente que nos ocupa y esta remisión por supuesto que se hizo por parte de la comisión quien no advirtió en ese entonces lo que ahora se viene a comentar.

Entonces me parece que tenemos que ser congruentes y tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde, gracias.

La presidenta del Consejo en uso de la voz señala que, quisiera comentar que efectivamente como ya lo mencionó la consejera Beatriz y la consejera Conchita, estos proyectos de resolución emanan ahora del Consejo General y los presenta la presidencia de este Consejo, debido a que la propuesta original, como ya lo advertía en mi explicación, con la que abrí la exposición de este punto del orden del día, no fue aceptada por la mayoría, de manera tal, que los argumentos que se vertieron en aquella sesión de la que emana este retorno a la Unidad Técnica Jurídica de lo Contencioso Electoral, son los argumentos que se sostuvieron por la mayoría en esa sesión y están plasmados en los proyectos de resolución de que se trata.

De manera que no haré mayor pronunciamiento, más que reiterar, aquellos argumentos que se dieron en ese momento y que se encuentran en los proyectos de resolución en donde finalmente se determina la inexistencia, por las razones que ya se mencionaron, hasta aquí mi intervención en esta segunda ronda, por lo que abriría tercera ronda si alguien más quiere intervenir en este punto.

Al no haber más intervenciones se somete a votación el procedimiento sancionador ordinario número 07/2021-PSO-CG, con las adecuaciones que solicito el consejero electoral Luis Gabriel Mota, mismo que es aprobado por mayoría de votos de los y las consejeras María Concepción Esther Aboites Sámano; Antonio Ortiz Hernández; Luis Gabriel Mota y Brenda Canchola Elizarraraz, a las trece horas con cuarenta y un minutos, y los votos en contra de las consejeras Beatriz Tovar Guerrero, Sandra Liliana Prieto de León y Nora Maricela García Huitrón.

En uso de la voz la secretaria del Consejo, hace constar que el representante suplente del Partido del Trabajo se incorporó a esta sesión a las trece horas con trece minutos.

En desahogo del punto **cuatro punto dos**, mismo que fue reservado por parte de la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León, relativo al procedimiento sancionador ordinario 08/2021-PSO-CG.



La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León en uso de la voz expresa que en relación con este proyecto de resolución que se pone a nuestra consideración quiero, por efecto de economía de tiempo y a efecto de dejar constancia de ello, que se tengan mis argumentos por reproducidos como si a la letra se insertaran en relación con la discusión de la valoración de las pruebas en el punto anterior, porque prácticamente se replican aunque son sujetos distintos los que están siendo procesados, en este asunto concreto, los argumentos son de idéntica razón en cuanto al acta correspondiente que levantó la oficialía electoral, en cuanto al acuerdo por medio del cual el Consejo General otorgó el registro a las candidaturas postuladas por este instituto político y de igual manera también que se entiendan por reproducidos los comentarios en torno al tiempo en que se presenta el proyecto de resolución que desde mi punto de vista tenemos tal cual que asumir todos lo que nos corresponde y lo que nos toca.

Haciendo precisión, en ese sentido de que tengamos mucha conciencia de los momentos procesales, porque si conocemos los momentos procesales, podremos saber en qué momento justamente podemos intervenir, y qué podemos instar en cada uno de los trámites que se hacen en estos procedimientos.

Ahora bien, quiero hacer una precisión en relación con este expediente y quiero comentarles que llama poderosamente mi atención la forma en la que se valora de manera indebida a mi juicio una de las probanzas que obran en el expediente, además de lo ya señalado, me refiero a la página cuarenta y cuatro del proyecto de resolución de que se trata y en esta parte se analiza una prueba documental privada y es privada porque es emitida por la otrora representante del partido político de que se trata, que establece o que señala la propia representante, pues es a mi juicio, una confesión de los hechos y aquí señala y continúa en la página cuarenta y cinco que no fue entregado, en principio, que no fue entregado para el registro de candidatura de la regiduría de que se trata el formato.

Dos, que no se entregó, tal formato en cumplimiento estricto al oficio de requerimiento, en cuanto a los requisitos solicitados y únicamente para acreditar su dicho adjunta copia simple del acuse de entrega de los requisitos de que se trata, por tanto y aquí se razona en el propio proyecto de resolución dice de dicha transcripción se advierte que el instituto político refirió que el formato denominado tres de tres contra la violencia, de este ciudadano, no fue entregado al momento de solicitar el registro, ni en cumplimiento al requerimiento realizado y en consecuencia lo que se hace es una valoración en las páginas siguientes en torno, a que, a pesar de ello, el Consejo General sí le otorgó el registro y en consecuencia al adminicular a juicio de quien esto proyecta una probanza con la otra adquiere mayor relevancia o tiene un mayor peso probatorio el acuerdo del Consejo General, no obstante que la propia representante del partido político hace esa confesión.

Nada más lo quiero agregar ya que para mí resulta fundamental no nada más la valoración en lo individual de cada una de estas probanzas sino



la valoración en su conjunto, nada más a efecto de acreditar los hechos de que se trata sería por mi parte todo y agradezco la atención.

En uso de la voz la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero señala que en los mismos términos del procedimiento anterior estaría también anunciando mi voto en contra por las mismas razones ya señaladas, y también estaría presentando un voto particular es cuanto.

En uso de la voz la consejera electoral Nora Maricela García Huitrón señala que también en obvio de repeticiones innecesarias por congruencia de lo referido en la sesión de diciembre votaré en contra este proyecto.

La presidenta del Consejo abre segunda ronda de intervenciones por si alguien desea realizar alguna, y al no existir intervenciones se somete a votación de consejeras y consejeros el procedimiento sancionador ordinario 08/2021-PSO-CG, aprobándose por mayoría de votos, a las trece horas con cuarenta y siete minutos, con los votos a favor de la consejera María Concepción Esther Aboites Sámano; el consejero Antonio Ortiz Hernández; el consejero Luis Gabriel Mota y la consejera Brenda Canchola Elizarraraz y los votos en contra de las consejeras Beatriz Tovar Guerrero; Sandra Liliana Prieto de León y Nora Maricela García Huitrón.

En uso de la voz la consejera presidenta menciona que solamente para clarificar que a petición del consejero electoral Luis Gabriel Mota desde el punto anterior las modificaciones se replican en los tres proyectos de acuerdo, al tratarse de modificaciones de forma.

En desahogo del punto **cuatro punto tres** relativo al procedimiento ordinario sancionador 10/2021-PSO-CG, y en este sentido también está reservado por la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León por lo que tiene el uso de la voz.

La consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León en uso de la voz expresa que, en relación, de igual manera con este proyecto de resolución que se pone a nuestra consideración hago la atenta súplica para que a efecto de economía del tiempo se tengan por reproducidos los argumentos vertidos en cuanto a los plazos en los que se propone este proyecto de resolución ya en esta instancia y de igual manera hago la atenta petición en el sentido de que se reproduzcan todas mis manifestaciones en torno a lo que considero una defectuosa valoración del material probatorio, porque insisto, se replican los mismos argumentos para su valoración respecto del acuerdo del Consejo General, sobre del cual se concede el registro a esta candidatura de este partido político postulado.

De igual forma en cuanto a la eficacia que se le resta, indebidamente también, al acta que realiza nuestro titular de la oficialía electoral por lo señalado y también quiero hacer mención nada más de un único dato adicional que veo diferente en relación con el resto de los expedientes que en el caso de que se trata, el ciudadano denunciado otrora candidato postulado a un cargo de elección popular, no objeto tampoco



el sentido y el alcance de las documentales públicas que obran en el expediente.

En consecuencia, y a mi juicio, se arriba a conclusiones erróneas que hacen justo que se les tenga por en principio inexistente los hechos y por supuesto que se les absuelva a todas estas personas de todos estos expedientes, entonces en consecuencia únicamente solicito que se deje constancia de ello y de igual forma estoy en contra del proyecto de resolución de que se trata.

En uso de la voz la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero señala que, en los mismos términos, para anunciar el voto en contra y la presentación de un voto particular.

La presidenta del Consejo en uso de la voz manifiesta que quisiera comentar que de todas las intervenciones que se vertieron aquí en esta mesa respecto de estos proyectos, un apunte que sí me parece importante mencionar, ya ahorita que estamos en la votación del último de los proyectos que se están proponiendo sería que como Consejo General, como Instituto siempre tenemos áreas de oportunidad para mejorar el quehacer que tenemos como autoridad electoral.

Esto por supuesto incluye la prontitud y la celeridad en la atención de los asuntos que están encomendados a cada una y cada uno de nosotros tanto de manera colegiada aquí como Consejo General, como de manera colegiada en cada una de las comisiones por lo que es importante señalar el compromiso de esta institución, también por parte de sus áreas técnicas, en ir atacando y avanzando en estas áreas de oportunidad.

Señala que, en el caso de la resolución de los asuntos, sabemos que es una carga de trabajo importante siempre de la Unidad Técnica Jurídica que por alguna circunstancia no se puede avanzar a veces más rápido, aunque se tenga toda la intención de hacerlo, porque la dinámica de la institución desde aquel proceso electoral 2021 en donde se recibieron prácticamente setecientos procedimientos especiales sancionadores que se tienen que atender por la propia Unidad Técnica Jurídica de lo Contencioso Electoral, adicional al trabajo que se tiene que atender de procedimientos sancionadores ordinarios, adicional al trabajo que tiene que atenderse por parte de esta misma unidad para elaboración de los acuerdos y de los puntos jurídicos que se ven en este Consejo General, así como muchos estudios que más están a cargo de la unidad.

Entonces esta situación y esta carga, como bien lo han mencionado repercute en una oportunidad para mejorar nuestro trato, nuestra estructura y en eso estamos trabajando, únicamente quisiera señalar eso para el compromiso de que para el proceso electoral que tenemos ya en puerta, están poniendo y se está apostando por una estructura más robusta, más preparada, más capacitada, para la atención de todos estos procedimientos y esa es la única aclaración que quisiera hacer.



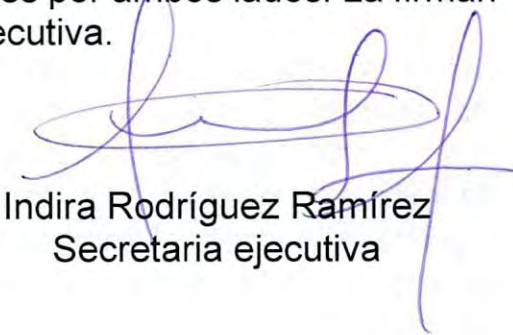
La secretaria ejecutiva, por solicitud de la presidenta del Consejo, somete a votación el proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario número 10/2021-PSO-CG, con el ajuste también que comentó el consejero electoral Luis Gabriel Mota y por supuesto tomando la consideración del voto particular de la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero, en ese sentido hace constar que la resolución se aprobó por mayoría de votos, a las trece horas con cincuenta y tres minutos con los votos a favor de la consejera María Concepción Esther Aboltes Sámano; el consejero Antonio Ortiz Hernández; el consejero Luis Gabriel Mota y la consejera presidenta Brenda Canchola Elizarraraz y los votos en contra de las consejeras Beatriz Tovar Guerrero; Sandra Liliana Prieto de León y Nora Maricela García Huitrón.

En desahogo del **punto cinco** del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, la consejera presidenta procede a clausurarla a las trece horas con cincuenta y cuatro del viernes catorce de julio de dos mil veintitrés. Asimismo, agradece a todas y todos la asistencia y participación, a las personas que siguen la sesión a través de las redes sociales institucionales y a Abdiel Cruz Espinoza y a Enoc Cruz Espinoza quienes apoyaron en esta sesión como intérpretes de lengua de señas mexicanas.

La presente acta consta de ocho fojas útiles por ambos lados. La firman la consejera presidenta y la secretaria ejecutiva.



Brenda Canchola Elizarraraz  
Consejera presidenta



Indira Rodríguez Ramírez  
Secretaria ejecutiva